

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 00334-2026-MPHCO/GM.

Huánuco, 15 de junio de 2026.

VISTO:

El Informe Legal N° 346-2026-MPHCO-OGAJ, de fecha 19 de mayo de 2026, el Informe N° 316-2026-MPHCO-GDE, de fecha 28 de abril de 2026, el Informe N° 447-2026-MPHCO-GDE/SGPEDPT, de fecha 27 de abril de 2026, la Resolución Gerencial N° 0195-2025-MPHCO-GDE, de fecha 19 de febrero de 2025, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194 de la Constitución Política del Estado, modificada por las Leyes de Reforma Constitucional N°27680, N°28607 y N°30305, establece que las municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; asimismo, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los órganos de gobierno locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.;

Que, el numeral 1.1) del artículo 1 del TUO de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N°006-2026-JUS, establece que **"1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta"**.

Que, el numeral 10.1 y 10.2 del Artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N°006-2026-JUS, prescribe que "Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14".

Que, el numeral 11.2 y 11.3 del Artículo 11 (Instancia competente para declarar la nulidad) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N°006-2026-JUS, establece que **"11.2 La nulidad de oficio será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad. La nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será conocida y declarada por la autoridad competente para resolverlo. 11.3 La resolución que declara la nulidad dispone, además, lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido, en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerárquico"**.

Que, la mencionada Norma Legal, en el artículo 202 (Nulidad de oficio), señala lo siguiente:

202.1. En cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10°, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agraven el interés público o lesionen derechos fundamentales.

La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad es declarada por resolución del mismo funcionario. (...).

Que, el numeral 217.2 del artículo 217 (Resolución) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N°006-2026-JUS, establece que **"Constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo"**.



Que, es preciso señalar que a nivel Jurisprudencial el TC en la STC N° 0090-2004-AA/TC, a partir de su fundamento 10, manifiesta que: *"el concepto jurídico indeterminado de contenido y extensión: el interés público"*, afirma que el concepto de interés público, es un concepto indeterminado, sin embargo, tiene que ver con todo aquello que beneficia a la comunidad en general. Su satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la organización administrativa. Por otro lado, señala que *"el interés público, como concepto indeterminado, se construye sobre la base de la motivación de las decisiones, como requisito sine qua non de la potestad discrecional de la Administración, quedando excluida toda posibilidad de arbitrariedad."*.

Que, la Administración, al momento de instruir los procedimientos administrativos a su cargo, debe garantizar el absoluto cumplimiento de todas y cada una de las normas y reglas del procedimiento administrativo preestablecido, en la medida que el cumplimiento de éstas importa al interés público, presente en el ejercicio de las funciones del poder asignadas a esta Administración (cualquiera que fuera de acuerdo a la norma que le compete). En sentido contrario, si la Administración encargada de la instrucción de los distintos procedimientos administrativos, propios de sus competencias y atribuciones, emite actos administrativos, que desconocen las Normas del Procedimiento establecidas, se genera una situación irregular puesto que, este acto está carente de legalidad, y que, por ende, agravia el interés público, situación habilitante para la declaración de nulidad del mismo. Citando al maestro Huapaya, quien señala lo siguiente: *"En tal sentido, se considera que la eventual emisión de actos administrativos ilegales, ya sea por contravención de disposiciones de fondo o forma, indudablemente compromete el interés público"* por lo que dicho acto administrativo debe de cumplir con verificar y acreditar el agravio del interés público al resolver la nulidad (oficio) o al solicitar la misma (ante el poder judicial vía proceso de lesividad).



Que, en relación a la **competencia**, para declarar la nulidad de oficio un acto administrativo, ha sido delimitada en el Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N°006-2026-JUS, en el numeral 202.2 del artículo 202 que establece **"La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida"**; por lo que, se entiende como regla general que la potestad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos no recae en el mismo funcionario o servidor que emitió el acto viciado, sino que recae en el superior inmediato de éste, teniendo como finalidad ejercer control jerárquico sobre la instancia subalterna y de ser necesario, dictar las acciones para el deslinde de responsabilidades administrativas a que hubiera lugar.

Que, por esta razón, cuando en el trámite de un procedimiento administrativo se incurra en un vicio que acarree la nulidad de oficio de un acto administrativo, será el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto viciado quien tenga la competencia para declarar la mencionada nulidad. Este superior jerárquico tiene que ser identificado siguiendo la línea jerárquica de los instrumentos de gestión de cada entidad; en ese sentido estando al Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Municipalidad Provincial de Huánuco, aprobado con Ordenanza Municipal N°19-2024-MPHCO, que señala en el artículo 80° que la Gerencia de Desarrollo Económico, depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal; resultando procedente que esta instancia declare la Nulidad de Oficio de la Resolución Gerencial N°0195-2025-MPHCO-GDE, de fecha 19 de febrero de 2025.

Que, es conveniente recordar que la nulidad de oficio de los actos administrativos puede ser declarada en sede administrativa por la propia entidad, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 202.3 del artículo 202 del TUO de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N°006-2026-JUS, que establece **"La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (02) años, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos, (...)".**

Que, bajo este contexto, cabe precisar que la Administración cuenta con poder jurídico para eliminar sus actos viciados en su propia vía, y aun invocando como causales sus propias deficiencias, al cual se le denomina potestad de invalidación, y en este supuesto puede llegar a declararla de oficio, y que puede ser motivada en la propia acción de la administración, orientada a asegurar el interés colectivo permanentemente y se respeta y no afecte el orden jurídico, y que se encuentra en la necesidad que tiene la autoridad administrativa de dar satisfacción al interés de respetar la vigencia del principio de juridicidad o del orden jurídico, sujeta al principio de legalidad, y ello constituye antecedente necesario para cualquier interés público de su actuación, y no se podría entender como un acto reconocidamente inválido; por ello la posibilidad de la anulación de oficio implica en verdad una vía para la restitución de la legalidad afectada por un acto administrativo.

Que, de la revisión integral de expediente, se tiene la **Notificación Preventiva de Sanción (NPS) N° 004573, de fecha 11 de noviembre de 2024**, dirigido a la presunta infractora Mariluz Cecilio Maylle, por la comisión de la infracción asignado al Código GDE-01, Sub Código SGPEDA-01 del Cuadro Único de Sanciones



Administrativas (CUISA) "por aperturar el establecimiento sin contar con la respectiva Licencia de Funcionamiento, no incluye: tratamiento especial. - Grifos, Discotecas, Video Pub, Boîtes, Disco Bar, Grills, Club nocturno, Prostíbulo y similares", documento que constituiría la imputación de cargos, mismo que fue debidamente notificado a la administrada. Procediendo la Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Agropecuario, emite el Informe N° 00154-2025-MPHCO-GDE/SGPEDA, de fecha 27 de enero de 2025, señalando entre otros lo siguiente: "(...) en merito al artículo 33 y artículo 36 de la Ordenanza Municipal N° 021-2023-MPHCO y TUO de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado con el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, se debe proceder con la infracción de la Notificación Preventiva de Sanción Administrativa N° 004573, a nombre de la Sra. Cecilio Maylle, Mariluz, recomendando la emisión del Acto Resolutivo", documento que constituiría el Informe Final de Instrucción, del cual no se aprecia documento que acredite su notificación.

Que, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N°006-2026-JUS, que prescribe en el Artículo 235° "(...) 3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación. 4. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción. 5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento concluye determinando la existencia de una infracción y, por ende, la imposición de una sanción; o la no existencia de infracción. La autoridad instructora formula un informe final de instrucción en el que se determina, de manera motivada, las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción; y, la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción, según corresponda. Recibido el informe final, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción puede disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que las considere indispensables para resolver el procedimiento. El informe final de instrucción debe ser notificado al administrado para que formule sus descargos en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles. 6. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quien denunció la infracción, de ser el caso".

Que, de lo indicado, se advierte que el procedimiento seguido para la imposición de la sanción administrativa infringió lo regulado en el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS. Esto se debe a que dicha normativa señala, de manera clara y precisa, que el informe final de instrucción debe ser notificado al administrado para que formule sus descargos en un plazo no menor de cinco (5) días hábiles. Esta situación no se cumplió en el presente caso, ya que no consta la notificación de dicho informe, contraviniendo así el procedimiento regular. Entonces, la Resolución Gerencial N° 195-2025-MPHCO-GDE, contiene vicios de nulidad contemplados en el numeral 1 y 2 del artículo 10 del TUO la Ley N° 2744, por cuanto se contraviene los artículos 230 (Principios de la potestad sancionadora - Debido procedimiento) y 235 (Procedimiento sancionador) de la norma en mención, además, carece de los requisitos de validez referidos a motivación y procedimiento regular, regulado en el artículo 3° del mismo dispositivo normativo.

Que, respecto al agravio al interés público, la administración al momento de instruir los procedimientos administrativos a su cargo, debe garantizar el absoluto cumplimiento de todas y cada una de las normas y reglas del procedimiento administrativo preestablecidos, en la medida que el cumplimiento de éstas importa el interés público, presente en el ejercicio de las funciones del poder asignadas a esta administración (cualquiera que fuera de acuerdo a la norma que le compete), siendo que en caso contrario, si la administración encargada de la instrucción de los distintos procedimientos administrativos, propios de sus competencias y atribuciones, emite actos administrativos que desconocen las normas del procedimiento establecidos, se genera una situación irregular puesto que, este acto está unido con la legalidad, y que por ende, agravia el interés público, siendo estos requisitos indispensables para la declaración de la nulidad de los mismos. Por lo que se considera que la eventual emisión de los actos administrativos ilegales, ya sea por contravención de disposiciones de fondo o forma, indubitadamente compromete el interés público, por lo que los actos administrativos deben cumplir con verificar y acreditar el agravio del interés público al resolver la nulidad (oficio) o al solicitar la misma (ante el poder judicial).



Que, mediante Informe Legal N° 346-2026-MPHCO-OGAJ, de fecha 19 de mayo de 2026, el jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica sugiere: *"Declarar la nulidad de oficio de la Resolución Gerencial N° 0195-2025-MPHCO-GDE, de fecha 19 de noviembre de 2024, por incurrir en vicio de nulidad establecidos en los numerales 1 y 2 del artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS (...)"*.

Que, de lo descrito en líneas precedentes se tiene que, resulta viable declarar la Nulidad de Oficio de la Resolución Gerencial N° 195-2025-MPHCO-GDE, por encontrarse vicios de nulidad contemplados en los numerales 10.1 y 10.2 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, concordante con el numeral 5 del artículo 3 de precitada norma, puesto que ha sido emitida en clara contravención a la ley y sin observar los requisitos de validez del acto administrativo en lo que concierne a la motivación y al procedimiento regular, por cuanto antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación, en ese contexto, de conformidad a la Ley N° 27444; de esta manera se acredita el agravio al interés público, cumpliéndose con el presupuesto para declarar la Nulidad de Oficio de la citada Resolución.



Que, es necesario destacar que, al declararse la nulidad materia del presente, corresponde retrotraer el procedimiento hasta la etapa en la que se produjo el vicio causal de nulidad; sin embargo, se aprecia que el plazo desde iniciado el procedimiento administrativo sancionador supera los nueve meses, por ende, corresponde declarar la caducidad de oficio del procedimiento iniciado con la NPS N° 4470, conforme lo regulado en el artículo 237-A de la norma antes señalada; bajo ese contexto, correspondería iniciar un nuevo procedimiento sancionador, debiendo proceder con la notificación al administrado la respectiva imputación de cargos, conforme a prescrito en el numeral 235.3 del artículo 235 del TUO de la Ley N° 27444. Asimismo, debiéndose recomendar a la Gerencia de Desarrollo Económico que realice la adecuación del procedimiento administrativo sancionador, al nuevo RASA aprobado por la Ordenanza Municipal N° 024-2025-MPHCO, de conformidad a lo regulado en la segunda disposición complementaria de dicha norma municipal.

Que, finalmente estando a lo dispuesto en el numeral 11.3 del artículo 11 correspondiente a la instancia competente para declarar la nulidad, del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, que establece ***"La resolución que declara la nulidad dispone, además, lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido, en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerárquico"***, en el presente caso, ameritaría la determinación de responsabilidades administrativas.

Que, por las consideraciones expuestas, y de conformidad al Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026, Ley N° 27444- Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley N° 27972- Ley Orgánicas de Municipalidades y la delegación de facultades con Resolución de Alcaldía N° 406-2024-MPHCO/A, de fecha 25 de junio de 2024, modificada mediante, Resolución Alcaldía N° 581-2024-MPHCO/A de fecha 09 de setiembre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO, de la Resolución Gerencial N° 0195-2025-MPHCO-GDE, de fecha 19 de febrero de 2025, por incurrir en vicio de nulidad establecidos en incisos 1) y 2) artículo 10° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en mérito a los considerandos expuestos.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DECLARAR LA CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la administrada Mariluz Cecilio Maylle, mediante la NPS N° 004573, al haber transcurrido el plazo de nueve (9) meses de notificado dicho documento, de conformidad al artículo 237-A del TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, sin que el procedimiento administrativo sancionador se haya resuelto.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER que la Gerencia de Desarrollo Económico formule la imputación de cargos a la administrada Mariluz Cecilio Maylle, conforme a lo establecido en el numeral 3 del artículo 235° del TUO de la Ley N° 27444 y el Régimen de Aplicación de Sanción Administrativa (RASA) y el Cuadro Único de Sanciones Administrativas (CUIA), debiendo notificarse en su domicilio real el pliego de cargos de forma clara



y precisa, para que en el plazo de cinco (05) días, cumpla con presentar sus descargos respectivos. Se **REMITEN** 37 folios en original.

ARTÍCULO CUARTO. - DAR POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA, de conformidad a lo establecido en el artículo 218 del TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 006-2026-JUS y la delegación de facultades dada con Resolución de Alcaldía N° 406-2024-MPHCO/A, de fecha 25 de junio de 2024, modificada mediante, Resolución Alcaldía N° 581-2024-MPHCO/A de fecha 09 de setiembre de 2024.

ARTÍCULO QUINTO. - EXHORTAR a la Gerencia de Desarrollo Económico la **ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN** de sus procedimientos administrativos sancionadores conforme a las disposiciones del nuevo Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUISA) vigentes.

ARTÍCULO SEXTO. - EXTRAER COPIAS CERTIFICADAS del presente expediente administrativo y se **REMITA** a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Provincial de Huánuco, a efectos de iniciar las acciones necesarias para determinar la responsabilidad administrativa respecto a la emisión de la Resolución Gerencial N° 0195-2025-MPHCO-GDE, de fecha 19 de febrero de 2025, sin seguir el procedimiento establecido en el artículo 235° numeral 5 del TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 006-2026-JUS.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - NOTIFICAR la presente resolución a la administrada **Mariluz Cecilio Maylle**, en su domicilio real en el Psje. Los Ángeles comité N° 10, Aparicio Pomares - Huánuco, en su condición de propietaria del establecimiento comercial con giro "Servicio de Traslado de Pasajeros, giros y encomiendas", ubicado en el Jr. San Martín N° 665 - Stand N° 104 - Huánuco, para conocimiento y fines.

ARTÍCULO OCTAVO. - DISPONER, a la Oficina de Comunicaciones y Gobierno Digital la publicación de la presente resolución en el portal web de la Municipalidad Provincial de Huánuco.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO
Ing. Alvaro Roger L. Mendoza Castillo
GERENTE MUNICIPAL